



Faltan 19 días y ayer el grupo realizó en Temuco una de sus últimas sesiones:  
**A días del plazo, Comisión de Paz busca “lograr alguna posición común” y aseguran que están “en un punto crítico”**

Acelerar compensaciones a comunidades mapuches y dar alternativas, como pensiones, viviendas o capital de trabajo para los campos, son algunas de las alternativas que baraja la instancia.

HÉCTOR BURGOS

Durante todo el día de ayer, en el campus Menchaca Lira de la UC de Temuco, se desarrolló la 52ª sesión —y la cuarta en la capital de La Araucanía— de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una de las últimas, a la espera de entregar su informe final al Presidente Gabriel Boric, el 30 de enero.

El secretario ejecutivo de la instancia, Víctor Ramos, destacó el trabajo que “seriamente están desarrollando los ocho comisionados”. Añadió que, en la etapa final siguen “intensamente buscando acuerdos y posiciones que permitan ofrecerle al país una salida al problema que nos mandató el decreto presidencial y todas las fuerzas políticas”, aunque reconoció que “es un tema difícil”, y que, al cumplirse 19 meses desde su conformación, aún buscan “lograr alguna posición en común”.

El senador y copresidente de la comisión, Francisco Huenchumilla (DC) afirmó que están “en la recta final” del trabajo como comisionados, por lo que de manera excepcional, las próximas semanas sesionarán en Santiago el lunes, jueves y viernes, “para ver si logramos tener un acuerdo entre el mundo mapuche, los agricultores y las forestales”.

Añadió que “esto no ha sido fácil, estamos en un punto crítico”.

**Conadi y la compra de terrenos**

Durante la jornada previa, algunos de los comisionados participaron de la sesión de la comisión de Agricultura del Senado, donde se abordó, entre



**CITAS.**— De manera excepcional el grupo sesionará las próximas semanas en Santiago el lunes, jueves y viernes.

**“Seguimos intensamente buscando acuerdos y posiciones que permitan ofrecerle al país una salida al problema que nos mandató el decreto presidencial y todas las fuerzas políticas”.**

**VÍCTOR RAMOS**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PAZ

otros temas, la violencia rural y la eventual compra de terrenos productivos demandados por comunidades mapuches.

La senadora por La Araucanía, Car-

men Gloria Aravena (P. Republicano), planteó que el trabajo desarrollado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la adquisición y entrega de terrenos a comunidades mapuche se ha realizado de manera deficiente.

“Hoy se proyectan más o menos 100 años para entregar todas las tierras que están comprometidas por el Estado. Lo que queremos (como comisionados) es entregarlas en 10 (años)”. Añadió que para ello se requiere “un cambio de ley (de tierras) para no seguir aumentando esta deuda estatal”.

La parlamentaria, autora de la Ley de Usurpaciones, agregó que dentro de las modificaciones legales se encuentra la posibilidad de “que se pueda elegir qué tipo de compensación

**“Hoy se proyectan más o menos 100 años para entregar todas las tierras que están comprometidas por el Estado. Lo que queremos (como comisionados) es entregarlas en 10”.**

**CARMEN GLORIA ARAVENA**  
 SENADORA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN

quieren (los mapuches que demandan tierras), entre las que se pueden encontrar pensiones, viviendas, equipamiento o capital de trabajo para los campos. Creemos que eso les da libertad a personas que están hace más de 20 años esperando tierras (porque) es probable que ya no van a tener el ánimo de desarrollarse a través de un predio que se les pueda entregar”.

A través de una carta enviada a sus socios, el también comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, coincidió en que “cualquier reparación, cuando sea documentada, debe ofrecer alternativas viables, incluidas compensaciones económicas, sin afectar las tierras productivas”.

En el documento, Naveillán advirtió que “nuestro país no puede permitirse que campos productivos queden improductivos o abandonados. El riesgo de que tierras entregadas no sean trabajadas afecta a la economía, al empleo y, en última instancia, a la seguridad alimentaria de Chile”.